Iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adiciona el artículo 9 bis a la **Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

* **En relación a pensión vitalicia a cónyuges, concubinos o compañeros civiles supérstites y sus descendientes.**

Planteada por la **Diputada Mayra Lucila Valdés González**, del Grupo Parlamentario “Carlos Alberto Páez Falcón”, del Partido Acción Nacional.

Fecha de Lectura de la Iniciativa: **07 de Junio de 2022.**

Turnada a la **Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.**

**Fecha de lectura del dictamen:**

**Decreto No.**

Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado:

**H. PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO**

**DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

**PRESENTE. –**

**Iniciativa que presenta la diputada Mayra Lucila Valdés González, conjuntamente con los diputados del Grupo Parlamentario “Carlos Alberto Páez Falcón”; en ejercicio de la facultad legislativa que nos conceden los artículos 59 Fracción I y 67 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y con fundamento en los artículos 21 Fracción IV y 152 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, presentamos INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por la que se adiciona el artículo 9 bis a la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con base en la siguiente:**

**Exposición de motivos**

México es el país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo, diversas organizaciones internaciones lo señalan con datos y estadísticas que son inobjetables. El Comité para la Protección de los Periodistas, un organismo activista de protección a la prensa con sede en Nueva York, denuncia que nuestra nación ofrece las peores condiciones de seguridad y de justicia para el ejercicio periodístico; “La dificultad para esclarecer los homicidios de reporteros y activistas es un grave problema en México, según reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien en diciembre admitió que la impunidad en esos casos supera el 90%”.

La organización Artículo 19 que ha documentado 153 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000.

141 son hombres y 12 son mujeres. Las condiciones de violencia e inseguridad para los comunicadores se han incrementado notablemente durante el actual gobierno encabezado por López Obrador. Desde luego, existe una corresponsabilidad de los estados y de la federación en el tema, se trata de un asunto complejo en cuanto a responsabilidades de prevención y de solución de este tipo de crímenes, atendiendo a las atribuciones que tienen los estados en la investigación y persecución de los responsables, como en la prevención y erradicación de tales conductas. La Federación cuenta con las mismas responsabilidades, además del deber de garantizar por medio de políticas públicas, acciones y medidas eficientes, la seguridad de los comunicadores y el libre ejercicio de su libertad de expresión y de información.

También es un problema de mecanismos fallidos y sin recursos financieros y humanos para garantizar la seguridad y la integridad de los comunicadores que, a tiempo, denuncian que sufren amenazas y acoso de la delincuencia y de quienes se sienten afectados por su quehacer informativo. A decir de los especialistas en temas de seguridad, muchas muertes de periodistas en México se pudieron evitar si las autoridades les hubieran brindado protección -por lo menos básica- al momento de que denunciaron las amenazas.

La impunidad en la resolución de sus crímenes es otro tema que impacta grandemente en el fenómeno de la inseguridad que viven las mujeres y hombres que se dedican a tan noble y vital labor para la sociedad, ya que la apatía y la negligencia de las autoridades para resolver los homicidios genera un clima y una sensación muy negativa que “alienta” aún más la violencia contra los periodistas.

Sin duda, es mucho el trabajo que como poderes legislativos nos corresponde hacer, sin menoscabo de la enorme responsabilidad institucional en materia de procuración de justicia, seguridad y prevención que tienen los poderes ejecutivos locales y el federal.

Sin embargo, en esta ocasión nos vamos a referir a un sólo tema: la afectación económica que sufren las familias de los periodistas que son asesinados por motivos relacionados con su quehacer informativo.

En fecha 13 de mayo del año 2008, se dio cuenta de un dictamen en este Poder Legislativo, que se refería a lo siguiente:

“Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, con relación a una iniciativa de decreto para reformar el artículo 67 fracción I, y adicionar el artículo 355 bis, del Código Penal del Estado de Coahuila; artículo 223 fracción XIII, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Coahuila y artículo 6 fracción VI y adición de un último párrafo a dicho artículo de la Ley de Asistencia Social para el Estado de Coahuila, sobre “Delito contra periodistas”, planteada por el Diputado José Ignacio Máynez Varela, conjuntamente con los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario “Vicente Fox Quesada”, del Partido Acción Nacional…”.

Cabe mencionar que la iniciativa también fue suscrita por los diputados del PRD, de Unidad Democrática y los diputados del Verde Ecologista y del PT.

En este caso, no haremos alusión a la reforma al Código Penal y al de Procedimientos Penales que incluía la reforma, sólo a la Ley de Asistencia Social, que es la que nos interesa para el desarrollo y justificación de esta propuesta. La exposición de motivos de la iniciativa, sin dejar de recordar que se ubica en el año 2008; establecía lo siguiente:

“La protección a la vida de los comunicadores sociales debe ser una prioridad. Todo asesinato de cualquier persona es reprochable, pero existen casos en donde, además de vulnerar el bien jurídico de la vida, se afecta también otros bienes jurídicos de los que dependen la cohesión de una sociedad democrática. Pues, cuando se asesina a un periodista para callar su actividad profesional, se vulnera el derecho de todos a conocer la información que no se debe ocultar y que, por tanto, es parte del derecho a conocer y difundir las noticias que nos permita deliberar los asuntos públicos de nuestra comunidad. De manera por demás lamentable, México, después de Irak, es el segundo lugar del mundo más peligroso para la actividad del periodista, según la asociación "Reporteros sin Fronteras" con sede en Paris. En Coahuila se comienza a vivir una vulneración grave de los derechos de las personas ante la desaparición de algunos compañeros periodistas, lo que obliga a legislar de manera especial para reconocer una protección prevalente en estos casos. Pues el asesinato, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta a los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad y para ello se propone una serie de medidas legislativas para asegurar la libre prensa.

…

En efecto, Amnistía Internacional ha declarado que los gobiernos están obligados a proteger los derechos humanos, en especial los que tienen que ver con la libertad de opinión y poner fin al hostigamiento, tortura y homicidio de periodistas. Los especialistas del tema señalan que son los gobiernos de muchos países del mundo y los grupos de poder coludidos con ellos (narcotráfico, mafia y la delincuencia organizada) los que continúan controlando y restringiendo la información que pretenden ocultar, con lo cual violan los derechos humanos de las personas cuyo trabajo consiste en investigar, difundir y cuestionar los actos que la opinión pública debe conocer. En algunos casos, las autoridades matan realmente al mensajero: el periodista. Pues al sacar a la luz abusos del poder, los periodistas se convierten a menudo en víctimas de los mismos actos de intimidación y hostigamiento que denuncian. Los que se dedican pues al periodismo de investigación corren con frecuencia un gran riesgo y ponen también en peligro a sus familias si descubren casos de corrupción y violación de derechos humanos.

La propuesta, en consecuencia, implica:

…

…

3. Establecer el derecho de los dependientes (esposa e hijos) del periodista muerto a recibir del Estado una pensión vitalicia para (sic) a favor de la cónyuge y provisional para sus descendientes hasta que cumplan su mayoría de edad, o bien hasta los 25 años para sufragar los gastos de estudios profesionales.” **Fin de la cita.**

Las comisiones unidas en sus consideraciones expresaron su total acuerdo con la propuesta, emitiendo un dictamen favorable y unánime de parte de todos sus miembros.

Repetimos, que en esta ocasión no vamos a ocuparnos de la propuesta de reforma al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales (de Coahuila) que se aprobó junto con la reforma a la Ley de Asistencia Social del Estado; y es esta última la que interesa para los fines de la presente. En este sentido, el decreto correspondiente quedó de la siguiente forma:

“…TERCERO. - Se adiciona un artículo 6 bis a la Ley de Asistencia Social Para el Estado de Coahuila, para quedar como sigue:

*ARTICULO 6 BIS. Además de los descritos en el artículo anterior, podrán considerarse sujetos de los servicios de asistencia social y otros beneficios sociales a víctimas del delito, a los dependientes de una persona que haya sido asesinada en función de su actividad dentro del periodismo. En este caso las o los cónyuges, concubinos o compañeros civiles supérstites y los descendientes podrán solicitar al Ejecutivo una pensión, la cual podrá otorgarse previo estudio socioeconómico e investigación que establezca elementos que el móvil del homicidio fue en función del desarrollo de la actividad periodística. Dicha pensión se sujetará a las modalidades y términos que establezca el decreto que, en su caso, se emita.*

Esta reforma a la Ley de Asistencia Social entró en vigor el 04 de junio del año 2008, y se manutuvo vigente hasta el día 27 de abril del año 2012, cuando entró en vigor la nueva Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, creada por el ex gobernador Rubén Moreira, ley que abrogó a la anterior, y de paso desapareció de modo “silencioso” y sin aportar argumento alguno en tal sentido, a la reforma que concedía el derecho de una pensión a los familiares de los periodistas asesinados por motivos relacionados con su actividad informativa.

Como grupo parlamentario consideramos que tal prerrogativa debió mantenerse vigente, en atención a la grave situación que enfrentan los periodistas y en especial sus familias, cuando estos son privados de la vida por motivos relacionados con su quehacer profesional.

Asimismo, se trata de una propuesta sensible y socialmente relevante que responde a las necesidades que el estado debe tutelar y garantizar de forma integral a favor, en este caso, de quienes arriesgan su vida para mantener informada a la sociedad. Debemos ser congruentes y observar el principio de progresividad en materia de derechos humanos, en Coahuila, durante los años recientes hemos hecho muy importantes reformas para garantizar la seguridad social y los derechos patrimoniales básicos de las familias de los desaparecidos, creamos una Ley de Pensiones Complementarias para Magistrados y Jueces, se han realizado reformas constantes en materia de pensiones para burócratas y maestros, algunas controversiales que fueron combatidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estamos luchando por un sistema de seguridad social mejor y más adecuado para los miembros de la seguridad pública y la procuración de justicia; en tal sentido, resulta más que justificado que podamos garantizar a las familias de los periodistas de Coahuila el acceso a un beneficio económico en los casos donde lamentablemente pierden la vida por consecuencia del ejercicio de informar a la sociedad.

La Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza establece lo siguiente:

**CAPÍTULO TERCERO**

**DE LAS PESONAS SUJETOS DE ASISTENCIA SOCIAL**

***Artículo 6.*** *Tienen derecho a la asistencia social las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y sus familias, preferentemente:*

***I a la VIII…***

***IX.*** *Víctimas de la comisión de delitos;*

***X a la XII..***

***XIII.*** *Las carentes de capacidad para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia;*

***XV…***

***XVI.*** *Las demás personas consideradas en otras disposiciones jurídicas aplicables.*

Para efectos de técnica legislativa, y para determinar dónde debe ir la propuesta que nos interesa, debemos destacar que esta redacción de la Ley de Asistencia Social vigente es muy similar a su versión previa, donde se encontraba la reforma que fue eliminada en el año 2012, para tal efecto colocaremos en un recuadro cómo estaba la Ley de Asistenta Social para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente hasta el día 27 de abril del año 2012 y cómo está la actual:

No leeremos el contenido del recuadro, pero queda para consulta de los interesados:

**Ley de Asistencia Social previa a abril de 2012 / Ley de Asistencia Social y P. de D. Vigente**

|  |  |
| --- | --- |
| **ARTICULO 6°.-** Son sujetos de la recepción de los servicios de asistencia social, preferentemente los siguientes:  *(REFORMADA, P.O. 11 DE MARZO DE 2006)*  I.- Menores en situación extraordinaria, ya sea por encontrarse en estado de abandono, desamparo, desnutrición o sujetos a maltrato, así como aquellos menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley;  *(REFORMADA, P.O. 24 DE OCTUBRE DE 2008)*  II.- Mujeres en período de gestación o lactancia y sus hijos en edad de infancia temprana conforme a lo previsto por la Ley de Protección a la Maternidad para el Estado de Coahuila;  *(REFORMADA, P.O. 2 DE ENERO DE 2007)*  III.- Personas adultas mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;  IV.- Las personas con discapacidad;  V.- Indigentes;  VI.- Personas que por su extrema ignorancia requieran de servicios asistenciales;  VII.- **Víctimas de la comisión de delitos, que se encuentren en estado de abandono;**  *(REFORMADA, P.O. 2 DE ENERO DE 2007)*  VIII.- Familiares que dependen económicamente de quienes se encuentran detenidos por causas penales, personas que padezcan enfermedades en etapa terminal, alcoholismo o fármaco dependencia;  IX.- Habitantes del medio rural o urbano marginados, que carezcan de lo indispensable para su subsistencia; y  X.- Personas afectadas por desastres.  *(ADICIONADA, P.O. 2 DE ENERO DE 2007)*  XI.- Mujeres en situación de maltrato o abandono y en situación de explotación incluyendo la sexual;  *(ADICIONADA, P.O. 2 DE ENERO DE 2007)*  XII.- Migrantes, desplazados o en situación vulnerable.  *(ADICIONADA, P.O. 2 DE ENERO DE 2007)*  XIII.- Las demás personas consideradas en otras disposiciones jurídicas aplicables.  *(ADICIONADO, P.O. 3 DE JUNIO DE 2008)*  **ARTICULO 6 BIS.-** Además de los descritos en el artículo anterior, podrán considerarse sujetos de los servicios de asistencia social y otros beneficios sociales a víctimas del delito, a los dependientes de una persona que haya sido asesinada en función de su actividad dentro del periodismo. En este caso las o los cónyuges, concubinos o compañeros civiles supérstites y los descendientes podrán solicitar al Ejecutivo una pensión, la cual podrá otorgarse previo estudio socioeconómico e investigación que establezca elementos que el móvil del homicidio fue en función del desarrollo de la actividad periodística. Dicha pensión se sujetará a las modalidades y términos que establezca el decreto que, en su caso, se emita.  *(REFORMADO, P.O. 2 DE ENERO DE 2007)*  **ARTICULO 7°.-** Los servicios de asistencia social dirigidos al desarrollo de menores, de la familia y al desarrollo de la comunidad serán de carácter preventivo y se prestarán en todos los casos en que resulten necesarios o exigibles, aún cuando no lo soliciten los presuntos beneficiados, salvo disposición en contrario.  Las medidas que, para los efectos anteriores, se adopten constituirán medios formativos y no tendrán carácter represivo, ni atentarán contra la salud o dignidad de las personas. | **Artículo 6.** Tienen derecho a la asistencia social las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y sus familias, preferentemente:  **I.** Los niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación extraordinaria por:  **a)** Malnutrición;  **b)** Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas;  **c)** Maltrato o abuso;  **d)** Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores o de quien legalmente esté obligado, en el cumplimiento y garantía de sus derechos;  **e)** Ser víctima de cualquier tipo de explotación;  **f)** Encontrarse en situación de calle;  **g)** Adicciones;  **h)** Ser víctimas de trata de personas;  **i)** Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental;  **j)** Ser víctimas del delito;  *(REFORMADO, P.O. 24 DE ENERO DE 2017)*  **k)** Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley;  *(REFORMADO, P.O. 24 DE ENERO DE 2017)*  **l)** Niños, niñas y adolescentes que intervengan en un procedimiento legal, velando siempre porque se respete su interés superior;  **m)** Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales y en condiciones de extrema pobreza;  **n)** Ser migrantes en condiciones de vulnerabilidad o repatriados;  **o)** Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa, o  **p)** Ser madres adolescentes.  *(ADICIONADO, P.O. 24 DE ENERO DE 2017)*  **q)** Ser hijos de padres o madres que cumplan con una condena privativa de la libertad.  *(ADICIONADO, P.O. 06 DE DICIEMBRE DE 2019)*  **r)** Ser hijos de madres víctimas de feminicidio, violencia familiar o de género.  **II.** Las mujeres:  **a)** En estado de gestación o lactancia, carentes de recursos económicos, y sus hijos en edad de infancia temprana;  **b)** En situación de maltrato o abandono, o  **c)** En situación de explotación, incluyendo la sexual.  *(ADICIONADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2017)*  **d).** Jefas de Familia.  *(ADICIONADA, RECORRIENDOSE LAS ULTERIORES, P.O. 24 DE ENERO DE 2017)*  **III.-** Los hombres:  **a)** Los padres adolescentes y padres solos que tengan a su cuidado hijos menores de dieciocho años de edad,  **b)** En situación de maltrato o abandono, y  **c)** En situación de explotación incluyendo la sexual.  *(REFORMADA, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2020)*  **IV.** Personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas o afromexicanas en situación de maltrato, explotación en cualquiera de sus modalidades, marginación, exclusión o pobreza alimentaria;  **V.** Migrantes en situación de vulnerabilidad;  **VI.** Adultos mayores en desamparo, incapacidad, marginación o sujetos a maltrato;  *(REFORMADA, P.O. 9 DE AGOSTO DE 2016)*  **VII.** Personas con discapacidad;  **VIII.** Dependientes de personas privadas de su libertad, de enfermos terminales, de alcohólicos o de fármaco dependientes;  **IX. Víctimas de la comisión de delitos;**  *(REFORMADA, P.O. 07 DE AGOSTO DE 2020)*  **X.** Indigentes y personas que se encuentren en situación de calle o pobreza extrema;  **XI.** Alcohólicos y fármaco dependientes, cuando por estas causas se encuentran en estado de abandono o indigencia;  *(REFORMADA, P.O. 07 DE AGOSTO DE 2020)*  **XII.** Personas afectadas por desastres naturales, catástrofes mundiales, guerras, pandemias, epidemias y que queden en estado de necesidad y desamparo;  **XIII.** Las carentes de capacidad para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia;  **XIV.** Personas que por su extrema ignorancia requieran de los servicios de asistencia, y  *(REFORMADA, P.O. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019)*  **XV.** Las personas con VIH-SIDA; y  *(ADICIONADA, P.O. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019)*  **XVI.** Las demás personas consideradas en otras disposiciones jurídicas aplicables.  *(REFORMADO, P.O. 24 DE ENERO DE 2017)*  **Artículo 7.** El Estado asume la atención y protección de niños, niñas y adolescentes en sus aspectos físico, mental y moral, como coadyuvante de los deberes y derechos de la patria potestad o la tutela, sin perjuicio de las disposiciones previstas sobre la materia en los ordenamientos e instrumentos aplicables.  **Artículo 8.** Los servicios que preste el organismo podrán ser de carácter recuperable mediante el pago de las cuotas fijas o proporcionales que el propio organismo establezca, atendiendo a la situación económica de la persona beneficiada o de sus familias.  **Artículo 9.** Las personas sujetas de asistencia social y su familia serán corresponsables con las instituciones públicas o privadas de quienes reciban los servicios. |

Cómo se aprecia, la estructura y el contenido de la Ley vigente es muy similar al de la ley abrogada, y mantiene el mismo orden con redacciones que observan, en su mayor parte, contenidos iguales y en otros casos muy parecidos. Por tal motivo consideramos que la adición puede ir en un articulo bis, tomando en cuenta que esta ley ya cuenta con diversos artículos “bis”.

Por todo lo expuesto, tenemos a bien presentar la presente iniciativa con proyecto de:

DECRETO

**ARTÍCULO ÚNICO:** Seadiciona el artículo 9 bis a la Ley de Asistencia Social y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 9 bis. -** Además de los descritos en el artículo 6, podrán considerarse sujetos de los servicios de asistencia social y otros beneficios sociales a los dependientes de una persona que haya sido asesinada en función de su actividad dentro del periodismo. En este caso las o los cónyuges, concubinos o compañeros civiles supérstites y los descendientes podrán solicitar al Ejecutivo una pensión, la cual podrá otorgarse previo estudio socioeconómico e investigación que establezca elementos para determinar que el móvil del homicidio fue en función del desarrollo de la actividad periodística. Dicha pensión se sujetará a las modalidades y términos que establezca el decreto que en su caso se emita.

…

TRANSITORIOS

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Segundo. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

##### ATENTAMENTE

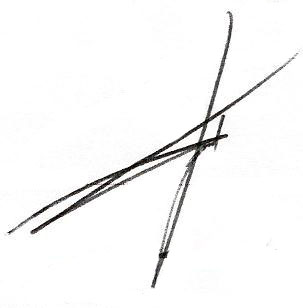
“POR UNA PATRIA ORDENADA Y GENEROSA Y UNA VIDA MEJOR Y MÁS DIGNA PARA TODOS”

**GRUPO PARLAMENTARIO “CARLOS ALBERTO PÁEZ FALCÓN”**

## Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 07 de junio de 2022



|  |
| --- |
| DIP. MAYRA LUCILA VALDÉS GONZÁLEZ |





|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DIP. RODOLFO GERARDO WALS AURIOLES |  | DIP. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA |